



## LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ: HAMBRE O HAMBRUNA

En los últimos días, oficiales de primera línea del gobierno han asegurado que el impacto de la sequía no es para alarmarse tanto y han acusado a la oposición y a los medios independientes, de agrandar el problema para dar una imagen de caos económico y afectar la imagen del inconstitucional presidente Ortega. Conociendo el alcance de la sequía en ciertos territorios y el débil e irregular régimen de lluvia en otros, varios sectores políticos y sociales han estado demandando al gobierno que declare una “emergencia alimentaria” que le permita alinear el funcionamiento de las instituciones y convocar apoyo externo para enfrentar las consecuencias del fenómeno.

Desde el gobierno, se han levantado voces respondiendo negativamente, tratando de igualar emergencia alimentaria con el “estado de emergencia nacional” que prevé la Constitución. El jefe de la bancada oficialista argumentó que no es conveniente decretar una emergencia pues implicaría restringir derechos civiles y políticos. El asesor económico de la presidencia Bayardo Arce afirmó que si hubiese hambre, él y los periodistas que le preguntaban, estarían famélicos, agregando que “el problema es que hay gente que cuando tenemos dificultades le dicen emergencia y piensan que es para no pagar créditos bancarios”. Arce dijo,

además, que la situación puede mejorar con la cosecha de postrera.

Argumentar que no se declara una emergencia alimentaria para evitar restricción a los derechos civiles no se sostiene como veraz, pues la conducta oficialista ha sido la contraria. Mediante cuatro fraudes electorales, el partido en el poder se ha posesionado de todas las instituciones, ha violado los derechos humanos y políticos de nicaragüenses por el solo hecho de ser opositores, de realizar alguna protesta social o manifestar algún desacuerdo con su línea o interés político. Ortega cuenta con sus propias tropas de choque para la represión social y política y las fuerzas policiales actúan en función de sus intereses partidarios y familiares.

Hace unos días, tropas de la Policía, detuvieron a campesinos del municipio de Rancho Grande y pequeños mineros de Santo Domingo que viajaban hacia Managua a protestar contra las explotaciones mineras que realizan compañías extranjeras a quienes el gobierno les ha entregado ventajosas concesiones. En paralelo, un reglamento del inconstitucional Ortega fue promulgado, pretendiendo reformar la ley 779, lo que magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho es una “política de Estado” que debe ser obedecida por los funcionarios judiciales, en clara confesión de la inexistencia de división de poderes. La salvaguardia de los derechos de los nicaragüenses es solamente un flojo pretexto gubernamental. Durante los temblores del mes de abril el gobierno decretó la alerta amarilla y pasó, luego, directamente a la roja, para que se tomaran las medidas adecuadas a la situación.

Al finalizar el mes de agosto, la pre-ocupación del gobierno por las apariencias había llegado al extremo de provocar o inducir un comunicado del Programa Mundial de Alimentos en el que esa oficina aseguró que en Nicaragua no hay, ni habrá hambruna. Los medios de comunicación oficialistas han destacado la noticia profusamente.

Es comprensible la preocupación del PMA de aclarar los alcances de ciertos términos desde el punto de vista estrictamente técnico. Hambruna, dicen, solamente se entiende cuando hay “procesos socioeconómicos que ocurren



Edward Centeno cuando era presidente ejecutivo de INIFOM (centro). Cortesía/Inifom

cuando un grupo de población sufre a largo plazo el deterioro de su nivel de alimentación porque no tiene suficientes alimentos y no hay recursos económicos para proveérselos”. Y según el comunicado, esa condición no se cumple en Nicaragua, aunque como se sabe el 42.7% de la población vive con menos de dos dólares al día, cifra que si se toma solamente el área rural se eleva al 61.3% .

En cuanto a la situación nutricional, según la ENDESA 2012, la desnutrición crónica alcanzaba al 17.3% de la población de niñas y niños menores de 5 años, cifra que en el área rural se elevaba hasta el 21.6%. En Nueva Segovia esa proporción ascendió a 27.7%; en Madriz, al 29.5%; en Jinotega, 27.8%; en Matagalpa, 21.9% y en la RAAN, 23.3%. Dicho de otra manera, en esos departamentos, uno de cada tres a cinco niños, padece de desnutrición crónica.

De acuerdo al Estudio de Caracterización del Corredor Seco, publicado a finales de 2012 por la FAO, Acción contra el Hambre y la Unión Europea, las sequías afectan de forma “severa” a 27 municipios, un 11.5% del área del país, siendo estos, de mayor a menor afectación: Santa María, San Isidro, Ciudad Darío, Palacaguina, Sébaco, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral, Somoto, Ciudad Sandino, San Francisco Libre, Ciudad Antigua, Mateare, Managua, Tipitapa, Terrabona, Ocotal, Macuelizo, Moson-

te, Yalaguina, Condega, La Trinidad, Estelí, Totogalpa, San Lucas, Teustepe, El Crucero y Telpaneca. Otros 63 municipios, el 36.9% del área, pueden resultar afectados en un grado “alto”. En ese Corredor Seco, las cifras de pobreza y de desnutrición son sensiblemente más elevadas que en el resto de municipios del país.

La prisa del gobierno para afirmar que no está pasando casi nada, es llamativa; así como la deliberada ausencia de información seria y las notables contradicciones de las declaraciones de los voceros gubernamentales.

## Las contradicciones del gobierno

Edward Centeno, titular del ministerio Agropecuario y Forestal, la institución con mayores fuentes de información sobre la producción rural, dijo en los medios de comunicación que estimaban daños en la producción en unos 105 o 106 municipios del país, por la falta de lluvias.

La vocera gubernamental Rosario Murillo, afirmó “...estamos conscientes de la dificultad que enfrentamos este año, un año de clima insólito, porque nos decían los especialistas del Ineter, que una sequía como esta se dio en el año 1976; pero este año, la sequía es más grave que esa última de la que se tiene registro”. En otra declaración, Murillo



Álvaro Fiallos, presidente de la Unag.

afirmó que la sequía era “un desastre para la región”, al tiempo que anunciaba las coordinaciones de instituciones gubernamentales nacionales con algunos homólogos centroamericanos.

Desde principios del mes de agosto, el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano informó que el gobierno estaba importando granos básicos, frijol rojo y maíz, para evitar la falta de alimentos como consecuencia de la sequía. El funcionario afirmó que se realizarían nuevas compras y que ya estaban preparadas nuevas importaciones de contingencia para evitar el alza de precios en los alimentos básicos.

A mediados del mismo mes, el Banco Central de Nicaragua recortó su pronóstico de crecimiento económico previsto para 2014, a una cifra cercana al cuatro por ciento. Ovidio Reyes, presidente de esa institución, dijo que durante el primer semestre del año la economía nacional había enfrentado tres factores adversos: el terremoto de abril pasado, la desaceleración del sector de la construcción y el bajo régimen de lluvias, que ha afectado la producción agropecuaria. Reyes dejó sobre la mesa la posibilidad de una nueva revisión de las cifras de crecimiento económico, si continuaba la sequía.

Por su parte, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, al demandar de la Asamblea Nacional la aprobación de una reforma que recorta

el presupuesto del año 2014, dejó claro que la disminución de ingresos era debida a la reducción de valor de las exportaciones, principalmente café y oro, por reducción de precios internacionales y a los efectos negativos de la sequía en el sector agropecuario. El ministro estimó en unos 118 millones de dólares las pérdidas de ingresos tributarios por esos dos conceptos.

Además, el gobierno anunció que estaba trabajando en el Corredor Seco, prestando atención de salud, distribuyendo paquetes de alimentos y ampliando la merienda escolar reforzada a las escuelas de esa zona, para lo que solicitó al PMA ayuda para 100,000 familias, adicional a otra entrega para 46,000 familias que el organismo había hecho la semana anterior. El presidente del Banco Central aseguró que el gobierno está iniciando la gestión de recursos financieros al FMI, el BID, el Banco Mundial y el BCIE, para hacer frente a los efectos de la sequía.

Reyes fue más allá al afirmar que estudian la activación del Programa de Inversión Pública para tratar que la economía no se desacelere; optimizar los programas existentes y complementarlos con los recursos adicionales que se consigan. Es lo que el gobierno ha llamado como “Plan B”, a funcionar si la sequía se recrudece.

De manera que, de acuerdo a los funcionarios gubernamentales, estamos

frente a la sequía más grave de los últimos cincuenta años, cuyo impacto, aún antes de concluir el invierno, ha afectado las proyecciones de crecimiento económico y disminuido la disponibilidad de fondos del gobierno, al punto de tener que recortar gastos sociales en el presupuesto. Si todo esto es cierto, el gobierno estaría manipulando las cifras del impacto social, pues en tales circunstancias es imposible que la población que acusa la condición de pobreza y desnutrición más elevada, no sufra las consecuencias en un nivel de severidad mayor que el mostrado en las cifras macroeconómicas nacionales. El gobierno parece haber estado consumido en cálculos globales, sin atender al impacto social de la sequía.

La otra cara de la moneda, la han estado presentando los medios de comunicación y las organizaciones gremiales, que proporciona una ponderación diferente y preocupante.

### La estimación social

Álvaro Fiallos, presidente de la Unag, organización que aglutina a pequeños y medianos productores, afirmó a finales del mes de julio que “estamos en una situación sumamente crítica”, haciendo énfasis en que en el llamado “corredor seco” que incluye municipios de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León y Chinandega, las pérdidas eran, prácticamente, totales.



Fiallos aseguró que habrá pérdidas en la cosecha de maíz y arroz de secano y estimó que con un buen régimen de lluvias a partir de agosto, se podría reponer lo que no se hizo en el ciclo de primera. El Cosep, organización gremial que aglutina a grandes productores, precisó las cifras de pérdidas estimadas de estos dos productos. De un total de 70,000 manzanas proyectadas, se dejarían de cultivar unas 16,000 debido a la sequía, poco más del 22% del área total estimada. En relación al arroz, estimaban que solamente se cultivaría el 60% del área que habitualmente se sembraba.

Por su lado, Faganic, una asociación de ganaderos, afirmó que la sequía ya ha causado un daño de consideración en la población ganadera, afectando especialmente a los pequeños productores, mismos que no son habitualmente sujetos de crédito y carecen de recursos propios para salir a comprar alimentos para su ganado.

Eduardo Rizo, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Jinotega, estima que la caficultura está sufriendo los efectos de la sequía y el irregular régimen de lluvias, pues una buena parte del grano de café no se ha desarrollado y se está cayendo, mientras que buena parte del resto, perderá calidad. Los productores de la región del Pacífico han sido los más afectados. Productores de esa región estiman una pérdida de hasta el 20% de la cosecha, en relación al año pasado. Esta situación se suma al daño causado por la roya y tendrá impacto en la reducción del empleo que genera la caficultura durante las cosechas.

Sinforiano Cáceres, líder de la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOO), productor que domina la realidad del campo y en particular, de los pequeños productores y cooperativistas, estimó que, a mediados de agosto, las lluvias irregulares y la sequía habían afectado más del ochenta por ciento de los cultivos de maíz y frijol en la región del Pacífico del país, donde prácticamente se perdió la oportunidad de sembrar durante el ciclo de primera. Además, dijo Cáceres, hay un impacto en los rendimientos que se verán disminuidos, afectando la producción global.

Hay otros impactos cuya medición no se tiene a la vista. Comunidades, líderes sociales y medios de comunicación han advertido que las fuentes de agua están sufriendo por el déficit de lluvias. Muchos ríos han visto disminuir radicalmente su caudal, otros están secos y muchos pozos están produciendo menos agua, amenazados de secarse, si las condiciones se mantienen.

De las estimaciones sociales se desprende que, al menos, hay una disminución grave de los ingresos y recursos de los campesinos de la región del Pacífico y el Corredor Seco; otros productores del país, también han visto reducidos sus ingresos por la pérdida de siembras y se han visto en la necesidad de liquidar sus pocos activos. En una magnitud no determinada, ya se han afectado los empleos en determinados rubros del sector agrícola. Y la disponibilidad de agua para consumo humano puede volverse crítica para algunas comunidades. Es lo que ya pasó.

### **Gestión de riesgo o gestión de crisis**

Cáceres señala que el gobierno ha carecido de un abordaje con enfoque de gestión de riesgo y está actuando como gestor de crisis. En efecto, las previsiones sobre el mal invierno ya estaban establecidas antes del mes de mayo. El gobierno advirtió tardíamente a los productores, no estableció medidas de prevención a tiempo, ni apoyó a los productores a tomar acciones de precaución, tampoco determinó el posible impacto productivo y menos aún, el posible impacto social.

Frente a la crisis, la respuesta gubernamental ha sido la del avestruz: esconder la cabeza en la tierra. Solamente se impulsan algunas acciones en el Corredor Seco, se determina la cantidad de niños y niñas con desnutrición aguda y se hacen números para cuadrar los balances globales. Nada más. Entre tanto, los productores y aún la población de las ciudades, con gran perplejidad han recibido todo tipo de recomendaciones estructurales que van desde cosechar agua y tener sistemas de riego adecuados, hasta cultivar marango y criar iguanas para comer.

El gobierno se ha negado a admitir que la sequía ya ocasionó pérdidas serias en los cultivos de granos básicos, que los campesinos pobres y trabajadores agrícolas son los más afectados. Quienes producían maíz y frijoles se han comido la semilla y se han quedado sin ella, sin insumos y sin dinero para comprarlas. En circunstancias en que el precio de los frijoles rojos ha llegado a costar más de treinta córdobas, su situación es realmente precaria.

Para tratar de apoyar a su sector, Faganic solicitó un fondo de 300 mil dólares para apoyar a los pequeños ganaderos a comprar alimentos para salvar sus reses, pero el gobierno primero lo prometió y luego lo negó. Esa era una cifra inferior a la que el propio gobierno gastará instalando varias decenas de árboles de lata, decorativos, en Managua.

Una situación de la magnitud actual, ameritaría un esfuerzo de mitigación urgente del daño acumulado, que comienza por conocerlo y admitirlo, por convocar a la sociedad y afinar la labor de las instituciones.

Pero, también urge un trabajo de prevención del impacto social que puede acumularse el resto del invierno y el verano que le sigue. Los productores que perdieron o tuvieron que comerse la semilla, requieren una dotación inmediata de la misma para poder sembrar en el ciclo de postrera, si las condiciones lo permiten. Los pequeños ganaderos necesitan apoyo para evitar que sigan muriendo sus reses.

Las medidas estructurales, las acciones de adaptación al cambio climático, la asistencia técnica para que los productores pequeños y medianos puedan implementarlas, requieren ser planeadas desde ahora y dispuestos los recursos para llevar adelante programas que respalden a los productores.

Eso implica que los altos funcionarios gubernamentales tomen en serio su trabajo, se preocupen de valorar los problemas de seguridad alimentaria, la sostenibilidad del campesinado, el desempleo de los trabajadores agrícolas y, se ocupen menos de dar una buena impresión, un rostro sonriente para la propaganda.